



La misión de Musk y Ramaswamy

Una mayor complejidad y sofisticación de las economías es parte natural del proceso de crecimiento y progreso. Pero la historia ha demostrado que, frente a ello, el Estado también busca expandir sus ámbitos de acción. Así, por ejemplo, la aparición de nuevas industrias producto de la innovación o el emprendimiento obliga a la configuración de nuevas reglas, lo que a menudo trae consigo una expansión del Estado. Sin embargo, dicha ampliación, al margen de la disciplina del mercado, puede dar paso a una burocratización innecesaria de los procesos y a la acumulación de ineficiencias. El caso chileno es un referente: un exceso de permisos, agravado por los problemas de productividad que afectan al empleo público, ha dejado al país sin las herramientas para aprovechar sus ventajas. El problema, por supuesto, se repite en una vasta mayoría de naciones.

Por eso es que el anuncio del Presidente electo de los EE.UU., Donald Trump, respecto de crear un Ministerio de Eficiencia Gubernamental ha concitado alto interés. Si bien no existen aún detalles, la idea apunta tanto a reducir las ineficiencias del Estado como a instaurar una cultura basada en el cumplimiento de objetivos, en un sector que cuenta con un presupuesto de 6.750.000 millones de dólares y donde el último año fiscal, de acuerdo con la Oficina de Presupuestos del Congreso, terminó con un déficit de 1.800.000 millones de dólares.

Los esfuerzos por reducir el tamaño del Estado ya habían estado presentes en la primera administración Trump. En marzo de 2017, este avanzó con una orden ejecutiva para “eliminar o reorganizar agencias federales innecesarias”. Pero las prerrogativas del Congreso en estos ámbitos contuvieron parte importante de un empeño en el que se buscaba eliminar 19 agencias. Ahora, una nueva mayoría en el Senado y la que se proyecta en la Cámara de Representantes podrían facilitar la agenda, aun cuando el ala moderada del Partido Republicano posiblemente contenga parte de estos bríos.

En este contexto, la decisión de Trump de poner al frente

del panel que estaría a cargo de los primeros avances a Elon Musk y a Vivek Ramaswamy agrega tanto fuerza como polémica a la idea.

Ambos son multimillonarios mediáticos que hasta ahora han interactuado con el sector público desde sus posiciones como gerentes generales o dueños de grandes empresas. En el caso de Musk, desde X hasta Tesla, pasando por SpaceX, sus tácticas de gestión no han estado libres de controversia —fuertes exigencias y despidos masivos—, como tampoco sus críticas a la burocracia del Estado. Por su parte, Ramaswamy, quien fundó la gigante biotecnológica Roivant Sciences y que participó en la primaria republicana como competencia de Trump, ha llamado a la eliminación de distintas agencias federales (incluyendo el FBI) y a despidos masivos en el aparato público, junto con criticar duramente la regulación impulsada por la FDA, llamándola “corrupta”, “hipócrita” y “dañina”.

La profundidad de las acciones que ambos impulsen

aún se desconoce, aun cuando Musk ha planteado públicamente su intención de cortar el presupuesto del Estado en cerca de un 30%. Es poco probable que tal cifra sea alcanzable, tanto por la inercia presupuestaria como por las necesidades del país y los incentivos políticos. Sin embargo, existen pocas dudas de que aumentar la eficiencia del gasto, promover incentivos adecuados dentro del empleo público, facilitar el retiro de funcionarios de planta y reducir la regulación aprovechando la tecnología pueden tener un impacto gigantesco en la productividad del Estado y en la reducción del déficit público.

La agenda no está libre de riesgos. Uno evidente es la personalidad de los involucrados. Será interesante observar cómo interactúan entre ellos y con el Presidente a partir de enero, cuando se produzca el cambio de mando. Otro riesgo es el propio de todo Estado, en que, de obviarse las reglas institucionales, los cambios podrían significar más y no menos ineficiencias. Con todo, la discusión en los EE.UU. parece apropiada. Frente a una población que demanda resultados, un Estado lento y pesado es una fuente de frustración social y un lastre para el progreso.

Si bien no exenta de riesgos y polémicas, la decisión de Trump es una poderosa señal para priorizar la eficiencia en el Estado.